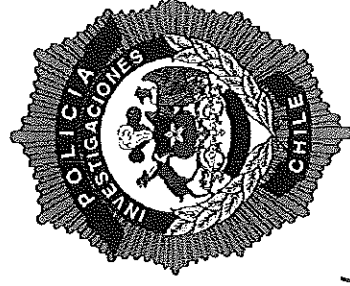


POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Departamento de Asesoría Técnica



RESOLUCIÓN N° 131

SANTIAGO, 07.SEP.009

VISTOS:

1. El Principio de Probidad Administrativa y Transparencia establecido en el artículo N° 8 de la Constitución Política de la República.
2. Ley 20.285, sobre Acceso a Información Pública y la regulación que contempla el ejercicio del derecho a acceder a información pública.
3. La Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
4. El Decreto Supremo N° 13, de fecha 02.MAR.009, que establece el Reglamento de la Ley 20.285 sobre Acceso a Información pública.
5. La Ley 18.575, Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
6. Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
7. La solicitud presentada por don **Cristian Caro Valdés**, el día 27.AGO.009, cuyo número de folio asignado por el sistema de gestión de solicitudes fue **AD010W-0000028**, a través del cual solicita certificado de ordenes de aprehensión, dictadas por los antiguos Juzgados del Crimen en contra de su cliente, señor **Juan Guillermo MUÑOZ ARANCIBIA**, Cédula Nacional de Identidad N° 8.035.929-2.

CONSIDERANDOS:

1. Que, la Ley 18.575, Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del estado, establece en su artículo N° 13, inciso 3°, que "*Son públicos los actos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial*", y en su inciso 5° que "*La información que no se encuentre a disposición del público de modo permanente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo*".

2. Que, la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, define en su artículo N° 2, letra f) como Datos de Carácter Personal o Datos Personales, “*Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables*” y en su letra ñ) como Titular de los Datos “*La persona natural a la que se refiere los datos de carácter personal*”.

3. Que, la Ley 19.628, dispone en el Título IV denominado “Tratamiento de los Datos por los Organismos Públicos”, en su artículo N° 20 que “*El tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público, sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con la sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular*”.

4. Que, la Ley 19.628 en su artículo N° 7 señala que “*Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, estarán obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo, sobre los demás actos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo*”.

5. El Decreto ley N° 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, establece como misiones de este servicio público, contenidas en el artículo 5 del citado cuerpo legal, las siguientes: “*Corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile, contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes*”.

En cumplimiento de estas misiones, los funcionarios de la Institución, de acuerdo a lo que dispone la segunda parte del inciso 1 del artículo 7° de la misma norma legal, deberán en el auxilio a las autoridades judiciales, cumplir sin más tramite sus órdenes y no podrán calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

6. La Ley 20.285, que regula el Derecho de Acceso a Información Pública, establece las únicas causales de secreto o reserva, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, “*cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido*

cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: letra a) si es en desmedro de la prevención, investigación, y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”, según lo dispone el artículo 21 N° 1 de la citada ley.

En efecto, la base de datos que la Policía de Investigaciones mantiene, tiene por objetivo reunir en una sola fuente las órdenes judiciales que se recepcionan en este servicio, las que deben ser cumplidas por la Institución, al tenor de lo ordenado por la autoridad judicial.

Atendido lo expuesto, el conocimiento del contenido de la base de datos que maneja la Institución, donde se reúnen para su cumplimiento, diversas ordenes judiciales, impediría que consiguiera el fin de que dan cuenta, eludiendo el requerido y consultante de la base de datos, la persecución penal, lo que iría en desmedro de la misión y de los objetivos de la Policía de Investigaciones.

Las órdenes judiciales que mantiene la PDI en sus registros, son para cumplirse en los términos dispuestos por la autoridad judicial, de modo que este registro no es de mero conocimiento o sólo informativo, a modo de notificación o comunicación, para aquellos que se verían afectados por la medida.

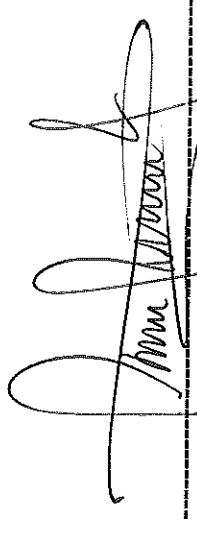
7. Que, conforme a lo anterior, la información contenida en los archivos de éste organismo público, referentes a órdenes de aprehensión, arraigo y arrestos vigentes, no será proporcionado a quien lo solicite, si la divulgación, comunicación o publicidad de la misma, afecte las funciones de la PDI.

RESUELVO:

1. En consecuencia, según lo razonado precedentemente, **se niega el acceso a la información solicitada por el peticionario**, don Cristian Caro Valdés, determinándose el secreto o reserva de la información requerida, conforme lo dispone el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley 20.285 Sobre Acceso a Información Pública, y artículo N° 7 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto la información relativa a órdenes de detención, aprehensión, arraigos y arrestos vigentes, no será proporcionada a quien lo solicite, si su publicidad, comunicación o conocimiento de la misma, afecte las funciones de la PDI, provocando desmedro en sus funciones de prevención, investigación y de persecución de crímenes o simples delitos o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

2. Notifíquese al peticionario a través del correo electrónico señalado en su carta de solicitud de acceso a información pública, cristiancarov@gmail.com.

Saluda a Ud.,



GERMAN MENDEZ GAJARDO
Subprefecto
Jefe Depto. Asesoría Técnica